

Fecha: 29-03-2026
Medio: El Mercurio
Supl.: El Mercurio - Cuerpo D
Tipo: Noticia general
Título: EL COMPLEJO DEBUT de la ministra Steinert que impacta el foco en seguridad del “gobierno de emergencia”

Pág.: 4
Cm2: 1.391,2

Tiraje: 126.654
Lectoría: 320.543
Favorabilidad: ☐ No Definida

Por estos días, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (independiente, 55 años), vive pruebas importantes para su carrera. El viernes debió hacer frente a un violento hecho en un establecimiento en Calama, donde un joven atacó con arma blanca y murió una inspectora. Y hoy es el primer “día del joven combatiente” que enfrenta el Gobierno, luego de una semana en que se reactivaron las protestas, por lo que se le ha tratado de transmitir cómo fueron las experiencias en las administraciones de Sebastián Piñera.

El interés de prepararla tenía que ver con que su desempeño en estas poco más de dos semanas liderando el ministerio está generando una sensación de estar “al debe” en materia comunicacional. Lo dicen conoedores del sector, analistas y parlamentarios oficialistas. También hay quienes al interior de La Moneda observan con preocupación los flancos que se han abierto a la nueva ministra.

La seguridad era una de las urgencias de las que hablaba el candidato José Antonio Kast —junto con la economía y la social— para su “gobierno de emergencia”, pero desde el 11 de marzo el debut ha estado marcado por lo que algunos califican como polémicas “innecesarias”.

Desde el Ejecutivo afirman que debido a los problemas económicos no se podía aplazar la decisión del alza del precio de las bicicletas y que tal vez eso ha influido en que la seguridad quedara en segundo plano.

A ello se suman controversias por actuaciones de la ministra. La principal ha sido respecto del llamado a retiro de la hoy exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) Consuelo Peña, funcionaria con 36 años de carrera que llegó a ser tercera al mando en la institución.

Tras una semana, en la cartera no consiguieron cerrar el tema y se mantienen las dudas respecto de si fue Steinert quien pidió la salida de Peña —como se comenta internamente en la PDI— o fue “una decisión institucional”, como dijo la ministra el lunes pasado.

La ministra reconoció el envío de un oficio el 13 de marzo —dos días después de asumir—, que fue filtrado, en el cual pedía antecedentes respecto de decisiones de Peña sobre el equipo que trabajaba en la indagación del llamado “Clan Chen”, en Iquique, donde Steinert fue fiscal. Ante un requerimiento del diputado PS Raúl Leiva, Contraloría revisaría la legalidad del documento.

Al interior de La Moneda preocupa esta situación no solo porque consideran que no se ha comunicado bien ni oportunamente, sino que podría incidir en cómo seguirá en el futuro la relación del ministerio con la PDI.

No es lo único. Dentro del oficialismo no fue bien evaluada una declaración de Steinert en la que afirmó que “quizás hay que plantearse la conveniencia o no de (el Servicio de) Migraciones esté en Seguridad”.

Este viernes, además, se conoció que el jefe de gabinete de la ministra, Francisco Chamblé, fue detectado por Contraloría como uno de los funcionarios que salieron del país estando con licencia médica, cuando en 2024 ejercía funciones en el Gobierno Regional de Tarapacá. Si bien se instruyó un sumario, este fue sobredado, pues dejó el cargo en diciembre de ese año. En 2025, asumió como jefe de gabinete de Steinert en la Fiscalía Regional de Tarapacá y ahora aterrizó junto a ella en el ministerio. La explicación de la cartera, entregada a Ciper, fue que “los antecedentes fueron expuestos antes del ingreso y se revisó la documentación para su ingreso y, como fue sobredado, no hay impedimento para integrar el ministerio”.

El mismo viernes ocurrió el mortal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde la vocería de Steinert, realizada en conjunto con su par de Educación, María Paz Arzola, fue considerada “mejorable en lo comunicacional” al interior del oficialismo.

CON CAPACIDADES, PERO “EN RODAJE”

Pese a la importancia que tenía la seguridad en la campaña de Kast, en enero llamó la atención que la definición de quién asumiría el ministerio se despegó solo días antes del anuncio del futuro gabinete.

El nombre de Trinidad Steinert generó buenos comentarios. Sus cercanos la destacan como una persona responsable, trabajadora y seria, y valoran su desempeño como fiscal en causas contra el crimen organizado, entre ellas, indagatorias que terminaron en condenas a células del Tren de Aragua.

Fue la primera futura secretaria de Estado presentada en el acto del 20 de enero. El diseño de la Oficina del Presidente Electo era destacar al equipo que se haría a cargo de la seguridad, liderado por Steinert.

Como ministra, sin embargo, la exfiscal ha generado dudas en su despliegue comunicacional, lo que podría impactar directamente una de las áreas más sensibles para el Gobierno. “Creo que como ciudadanía estábamos pidiendo una autoridad que haga algo con esta percepción de inseguridad tan aguda que tenemos. Eso pasa por entender que quien está a cargo de la seguridad está liderando. Eso me falta. Faltan señales”, analiza Francisca Werth, académica de la U. Diego Portales y exdirectora ejecutiva del Ministerio Público.

Si bien reconoce que lleva poco tiempo y que la instalación “nada es el”, para Werth “se echa de menos un conjunto de medidas no efectistas, pero sí que busquen ganancias rápidas y den señales a la ciudadanía de que la seguridad es tan prioritaria



PREOCUPA SU DESEMPEÑO POLÍTICO Y COMUNICACIONAL:

EL COMPLEJO DEBUT de la ministra Steinert que impacta el foco en seguridad del “gobierno de emergencia”

El anuncio de recortes presupuestarios en las policías y la controversia por la salida de la tercera autoridad de la PDI han afectado las primeras semanas de la exfiscal al mando de una de las carteras prioritarias para la nueva administración. Sin embargo, Steinert defiende que ha participado de operativos que han sido efectivos. “Más que entregar anuncios, lo que queremos es demostrar que la coordinación y el trabajo efectivo rinden frutos”, afirma. **NADIA CABELLO**

como se dijo”. Y añade: “Sobre todo considerando que el nombramiento del gabinete fue en enero, no recientemente, se podría haber dicho ‘voy a tener estas cinco cosas que voy a hacer los primeros 10 o 15 días’. A lo mejor tampoco es que se tengan que implementar completamente, pero anunciar que por ahí viene la mano, qué cosas se van a priorizar (...), tener una planificación estratégica”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que durante la campaña el equipo de Kast —del que no fue parte Steinert— había elaborado una serie de planes para intervenir barrios y espacios públicos o enfrentar el crimen organizado, entre otros.

Felipe Harbo, investigador del Centro de

su casa, el 7 de marzo, ninguna autoridad del nuevo gobierno, luego de asumir, se comunicó con ella. Según cuenta la alcaldesa a este medio, solo el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, le escribió por WhatsApp antes de que tomara posesión del cargo, pero tras el 11 de marzo no han tenido comunicación con ella.

Conoedores del sector creen que la ministra sigue actuando como fiscal, sin asumir que su cargo tiene un alto componente político y comunicacional. Otros defienden que la secretaria de Estado está “en rodaje” y que esperan que su desempeño mejore.

Igualmente, en el Ejecutivo temen que una mala evaluación a la cartera se traspase al Presidente. En la primera encuesta Cadem después de haberse instalado el Gobierno (del 15 de marzo), Steinert aparecía con 44% de conocimiento y 70% de imagen positiva o muy positiva. Además, se la mencionaba como la segunda ministra más influyente del gabinete, después del titular de Interior, Claudio Alvarado.

La encuesta de Black&White de esta semana muestra otros datos a considerar: la proporción de los que aprueban la forma en que el Gobierno está enfrentando la delincuencia cayó 9 puntos (de 48% a 39%) y la desaprobación llegó a 43%.

TENSIÓN EN EL CONGRESO POR RECORTES

Tampoco en el Congreso se ve un panorama fácil para la ministra. El pasado lunes, además de tratar el caso de la PDI, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, junto con el subsecretario Jouannet, dio a conocer una propuesta de ajuste presupuestario para el sector que inquietó dentro y fuera del Congreso. En total, se estimó en más de \$72 mil millones de recorte para este año, que incluye la disminución de recursos de las policías.

Una de las críticas más sentidas fue la realizada por el diputado Enrique Bassaletti (ind.-P. Rep.), quien afirmó: “Estoy muy preocupado con este anuncio, porque esperaba que se le diera prioridad a la seguridad como estaba en el programa”. El fue uno de los redactores de las medidas programáticas en seguridad de Kast.

La ministra defiende que “lo presentado en la comisión fue una propuesta que respondió a la solicitud del Ministerio de Hacienda, pero es solo una propuesta, aún no se ha generado el trámite administrativo correspondiente a la reducción de dichos fondos. En paralelo, estamos en constante conversación con Hacienda, priorizando las distintas partidas presupuestarias (...)”.

Para hoy, que se conmemora el llamado “día del joven combatiente”, la ministra afirma que se coordinaron servicios preventivos y en algunas zonas se reforzará el personal policial.

El miércoles, en una nueva sesión de la comisión, diputados de oposición negaron la unanimidad para que ingresaran a la sala Jouannet y Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención del Delito. “La ministra tenía que venir y no está”, argumentó Jaime Araya (ind.-PPD). “¿Qué está haciendo ahora (la ministra) en vez de estar dando explicaciones por el recorte presupuestario?”, añadió.

Para el presidente de la comisión, Cristián Araya (P. Rep.), “la izquierda claramente tomó una actitud obstruccionista. Han tratado de bloquear la discusión legislativa y hacer puntos políticos. Si alguno pensó que tras cuatro años en el poder cambiarían y se volvieron institucionales, se equivocaron, siguen siendo los mismos que apoyaron el 18 de octubre, no hay que perderse”.

Así se comenzó a instalar un ánimo tenso al interior de la comisión que deberá tramitar varias de las prioridades legislativas del Gobierno. En la instancia hay seis representantes de partidos de gobierno y cinco de oposición, pero hay también dos integrantes (Gloria Navellán, del Partido Nacional Libertario, y Juan Valenzuela, del Partido de la Gente) cuyas votaciones pueden marcar la diferencia y no está claro que apoyen todas las decisiones del Ejecutivo.

“QUEREMOS DEMOSTRAR QUE EL TRABAJO EFECTIVO RINDE FRUTOS”

Ante las críticas, la ministra Steinert respondió respecto de la agenda de seguridad que “decir que no se ha lucido es un comentario que al parecer piensa que la emergencia en seguridad es un punto netamente político, pero es una realidad que viven todos los días los chilenos. Desde el día uno estuvimos apostando a Carabineros y la familia del funcionario herido en Puerto Varas que, lamentablemente, luego tuvimos que ir a despedir junto al Presidente. Posteriormente, y durante tres días, coordinamos un operativo a nivel nacional con búsqueda de prófugos de la justicia, muchos de los cuales llevaban años caminando entre nosotros sin que nadie los controlara y detuviera. Fueron casi tres mil detenidos, cifra que ha crecido posteriormente, ya que los operativos han continuado realizándose constantemente en distintos puntos de la RM y el país, en trabajos conjuntos entre Carabineros y PDI”.

Asegura que, “más que entregar anuncios, lo que queremos es demostrar que la coordinación y el trabajo efectivo rinden frutos. Hemos coordinado distintos operativos focalizados en sectores complicados y lo seguiremos haciendo, porque la ciudadanía exige presencia policial en las calles y seguridad coordinada con los alcaldes y sus municipios”. De sus actividades a la fecha, destaca, entre otras, su visita a la Región de La Araucanía este jueves.

A juicio de Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la U. Andrés Bello, la ministra “debería poner el foco en cuatro aspectos centrales para asumir la seguridad como una política de Estado. En primer lugar, está la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 (...). Para ello, existen instrumentos de gestión que parece adecuado aplicar a nivel nacional, regional y local, con el fin de lograr el impacto buscado. En segundo lugar, está la implementación de la modernización del Sistema de Inteligencia del Estado, que entrará en vigencia próximamente con la nueva ley. (...) Tercero, está lo relacionado con la reforma constitucional que incorporará a Gendarmería dentro del circuito de la Seguridad Pública. Por último, se debe avanzar en una estrategia nacional contra el terrorismo con enfoque integral, como lo mandata la nueva ley del Ministerio de Seguridad Pública”.